

Fecha Sanción 8 Junio 2000
Publicado en Boletín Oficial B.O.N° 55-11/7/00 - PAG. 1354/55
Extracto VETASE LEY SANCIONADA EL 18 DE MAYO DE 2000 - CONTROL Y
REGULACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADA POR
PARTE DEL EN.RE.-

San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de Junio de 2000.

VISTO:

La Ley sancionada por la Legislatura Provincial el día 18 de Mayo del año 2000, sobre la regulación y control de los servicios públicos de gestión privada; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley sancionada presenta un conjunto de imprecisiones en varios de sus artículos, que obstaculizarán su aplicación por la autoridad correspondiente, es decir el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (EN.RE.).

Que entre dichas imprecisiones cabe señalar la redacción del artículo 1°, en el cual no se aclara que la autorización para prestar servicios público debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo Provincial; y que, por otra parte, la normativa no sólo debe referirse a los servicios públicos, pues se trata de una regulación de carácter específico, que no puede comprender todas aquellas "actividades de interés general", lo cual resulta demasiado amplio.

Que varios artículos resultan reiterativos de disposiciones ya contenidas en la Ley N° 4836, tales como el art. 4°, que reitera al art. 17° inc. b) y al art. 19° de la Ley N° 4836; el art. 5° que reitera al art. 4° inc. 29) de la Ley N° 4836; el art. 6° que reitera al art. 4° inc. 17) de la Ley N° 4836; el art. 7° inc. c) reitera al art. 4° inc. 17) y, en parte, el inc. 6) de la Ley N° 4836; el art. 7° inc. d) reitera nuevamente al art. 4° inc. 17); el art. 7° inc. f) está implícito ya en el art. 4° inc. 32) de la Ley N° 4836 (de carácter omnicompreensivo y residual para toda situación no prevista), y también en el art. 14 incs. 6) y 7) de la misma Ley N° 4836; el art. 7° inc. g) reitera a los arts. 4 incs. 17) y 28) de la Ley N° 4836; etc.

Que el art. 3° de la Ley sancionada tiene una redacción confusa, no teniendo su última parte relación gramatical o lógica con la primera, lo que dificultará posteriormente su correcta interpretación y aplicación.

Que el art. 4° de la misma Ley sancionada resulta innecesario, en base a lo ya establecido por art. 17° inc. b) y al art. 19 de la Ley N° 4836, que rigen claramente lo relativo a los recursos y procedimientos administrativos en materia de servicios públicos.

Que no resulta conveniente que los controles por muestreo del EN.RE. a los que se refiere el art. 6°, 2do. párrafo, de la Ley sancionada, sean efectuados en forma permanente, sino periódica, porque lo contrario implicaría más una intervención que una inspección, desnaturalizándose de esta manera las funciones propias del Ente Regulador, determinadas ya por Ley N° 4836.

Que resulta necesario establecer en forma clara y precisa la obligación legal de los concesionarios de prestar colaboración y facilitar toda documentación e información pertinente que se le requiera con motivo de una inspección o control del EN.RE., sin perjuicio del resguardo riguroso de la confidencialidad de esa información; obligación que no fija la Ley en cuestión, en forma expresa, en ninguno de sus artículos.

Que la atribución que le acuerda el art. 7° inc. a) de la Ley sancionada al Ente Regulador resulta excesiva, desnaturalizando sus funciones propias, pues el mismo no puede intervenir en forma directa en la administración interna de los concesionarios, colisionando con el derecho de libertad de organización empresarial dentro del marco legal de las sociedades comerciales, y de la observancia de las normas técnicas contables fijadas por los organismos competentes.

Que la facultad establecida en el art. 7° inc. e) de la Ley en cuestión constituye un claro apartamiento del objeto del EN.RE., ya que no surge de dicha norma que procure el control, la protección ni la observancia de los objetivos que clara y taxativamente ordena el art. 3 de la Ley N° 4836.

Que, por otra parte, no resulta razonable que el EN.RE. imponga a los concesionarios normas obligatorias sobre los modos de contrataciones de estos últimos con terceros, en consideración a que sus recíprocas relaciones son propias de Derecho Privado y extrañas al Derecho Administrativo, y al objeto específico de control y regulación del EN.RE. (art. 3 de la Ley N° 4836), estando, además, dichas contrataciones ya reguladas particularmente por la legislación específica.

Que la norma contenida en el art. 12° de la Ley sancionada está vinculada directamente con el art. 29 de la Ley N° 4836, la cual prevé que las penalidades serán las expresamente previstas en los respectivos contratos de concesión.

Que, respecto del mencionado art. 12°, resulta necesario aclarar en su redacción algunas importantes imprecisiones: entre ellas, que las resoluciones del EN.RE. deben tener un plazo determinado para su cumplimiento, debiendo en consecuencia encontrarse firmes para la aplicación de la sanción correspondiente; y que deberán además fijar de modo expreso el monto de la sanción, para lo que el art. 12° debe determinar claramente la escala respectiva; y que resulta conveniente, por otra parte, tener en cuenta, a los fines de la graduación de la sanción, los antecedentes del concesionario y la reincidencia observada por el mismo.

Que la redacción del art. 13° de la Ley sancionada también incurre en graves falencias. En efecto, para la graduación de la multa por incumplimiento del concesionario a resoluciones firmes del EN.RE., no se han considerado situaciones similares o análogas, como las ya previstas en el Contrato de Concesión de la Distribución de Energía de la Provincia de Catamarca, en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 3, por lo que resulta oportuno observar dicha redacción.

Que, por otra parte, el mencionado art. 13° no prevé el procedimiento para la aplicación de las sanciones, en el cual, necesariamente, debe respetarse el debido proceso y particularmente el derecho de defensa, de raigambre constitucional.

Que el art. 16° de la Ley sancionada, en concordancia con el art. 17° de la misma, también resulta excesivo, pues ambas normas crean un nuevo título ejecutivo a favor de entidades privadas que hubieran realizado obras que deben ser reembolsadas por el concesionario, cuando éste no las abone en tiempo oportuno; así como el beneficio a favor de las entidades privadas para obtener, en cualquier momento, el embargo de bienes, fondos y/o valores del concesionario, lo cual también constituye un privilegio especial sin justificación razonable.

Que tal creación legislativa importa una evidente modificación al juicio de apremio establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, sin que exista una justificación razonable para ello, creándose un privilegio particular y especial en favor de empresas privadas, por el solo hecho de que el obligado al reembolso resulta ser un concesionario de la prestación de un servicio público.

Que, en consecuencia, no se considera prudente la iniciativa legislativa de incluir como legitimados activos del proceso de ejecución fiscal a entidades privadas, en razón de que no se justifica dicho privilegio.

Que, por otra parte, debe señalarse que en razón del tiempo transcurrido desde la presentación del Proyecto de Ley en cuestión a las Cámaras Legislativas, se han tornado innecesarias la gran mayoría de las disposiciones contenidas en la misma; por el contrario, los problemas que actualmente se plantean en relación al control de los servicios públicos de gestión privada pueden solucionarse por medio de una simple reglamentación de las Leyes ya vigentes en la materia.

Que, atento a las numerosas imprecisiones y falencias observadas, así como la falta de necesidad real de la nueva normativa legal, a raíz de la existencia de normas que dan, hoy, solución efectiva a los problemas planteados en el tema en cuestión, corresponde vetar la Ley sancionada por la Legislatura Provincial, conforme la facultad otorgada por el Art. 149° Inc. 3 de la Constitución de la Provincia, en concordancia con los Arts. 118° y 120° de la misma.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. 1°.- Vétase la Ley sancionada por el Poder Legislativo Provincial con fecha 18 de Mayo de 2000, sobre la regulación y control de los servicios públicos de gestión privada.

Art. 2°.- Con nota de estilo, hágase conocer la presente disposición a la Cámara de origen respectiva (conf. Art. 120° de la Constitución Provincial).

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

Dr. OSCAR ANIBAL CASTILLO

Gobernador de Catamarca

Dr. Pedro Rodolfo Casas

Ministro de Gobierno y Justicia